

Expediente:PA-SER 008/21
 Presupuesto de licitación:95.500,00 euros
 Plazo de ejecución:..... 1 año

RESOLUCIÓN DE INICIO

SERVICIO DE SEGURO A TODO RIESGO DE DAÑOS MATERIALES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN

Visto el informe de necesidad emitido por el Director Económico Financiero y de SS.GG. del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, como responsable de este contrato, se pone de manifiesto la necesidad de iniciar la tramitación del expediente arriba referenciado de acuerdo a las siguientes consideraciones y características:

1. Objeto detallado del contrato.

El servicio de seguro a todo riesgo de daños materiales en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón, de acuerdo con el alcance, límites y coberturas indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas y con medidas de respeto al medioambiente.

2. Motivación de la necesidad del contrato.

El Hospital Universitario Fundación Alcorcón necesita para la realización habitual de su actividad asistencial, mantener en funcionamiento sus instalaciones y equipamiento productivo, por lo que los riesgos derivados de los daños que pudieran sufrir estos por causas accidentales deben estar cubiertos, para que en el caso de que acontecieran, no supusieran un quebranto tal que el retorno a la actividad fuera difícilmente asumible por razones económicas. Dentro de una gestión adecuada de administración diligente del patrimonio social de la Fundación se encuentra la contratación de un seguro de daños razonable, que cubra los grandes riesgos

El Hospital Universitario Fundación Alcorcón necesita para la realización habitual de su actividad asistencial, mantener sus equipos electromédicos en las condiciones óptimas de funcionamiento, evitando situaciones de riesgo para la salud de los usuarios y de los profesionales, de manera que asegure la continuidad de la prestación sanitaria que constituye su objeto, con las interrupciones estrictamente imprescindibles.

Así pues, se debe habilitar el procedimiento de contratación para limitar el posible quebranto de actividad, y recuro económicos que podría suponer el acontecimiento de un daño accidental sobre determinados bienes del patrimonio del Hospital. De manera que se garantice en lo posible la realización de la actividad asistencial sin interrupciones, garantizando la operatividad y disponibilidad de los equipos necesarios.

3. Justificación del procedimiento de licitación.

El procedimiento utilizado es el procedimiento abierto, que es el procedimiento que la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP, en adelante) en su artículo 131, establece como ordinario. Por su objeto, no se trata de un contrato de concesión de servicios especiales, ni de un concurso de proyectos. Tampoco se dan los supuestos previstos

en el artículo 168 para seguir el procedimiento negociado sin publicidad; ni los supuestos previstos en el artículo 167 para recurrir al diálogo competitivo o a la licitación con negociación, ni los supuestos indicados en el artículo 177 para emplear el procedimiento de asociación para la innovación.

Se utilizará el procedimiento abierto, en el que cualquier licitador que tenga la solvencia económica y técnica necesaria puede presentar oferta.

Regulación armonizada. Por no sobrepasar los límites económicos marcados en el art. 22 de la Ley 9/2017, de 9 de noviembre, de Contratos del Sector Público para los contratos de servicios, se entiende que NO es un contrato sujeto a regulación armonizada.

El contrato es adecuado y apropiado para asegurar la continuidad de la actividad propia del HUFA, sanitaria y no sanitaria.

Por todo ello, este Órgano de Contratación entiende que para atender las necesidades objeto del contrato de referencia resulta necesario tramitar un expediente de contratación de conformidad con los artículos 316 a 320 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. El expediente es abierto con pluralidad de criterios de adjudicación (objetivos).

4. División en lotes

El servicio se licita en un lote único, por ser en sí mismo una unidad de servicio.

La no separación en lotes no supone ninguna restricción a la competencia, ya que cualquiera de las empresas que cuente con la necesaria habilitación de la Dirección General de Seguros tiene solvencia suficiente y plena capacidad para su realización.

5. Duración del contrato y de ejecución de la prestación:

La ejecución del servicio tendrá la duración de 12 meses, con posibilidad de una prórroga anual adicional.

Esta duración ha sido fijada teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de las mismas y es menor que el plazo máximo de duración de cinco años, incluyendo las posibles prórrogas, previsto en el art. 29.4 de la LCSP para los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva.

Con esta duración, se pretende conseguir el equilibrio entre la dinámica necesaria de competencia en el mercado, y la estabilidad necesaria para asentar las buenas prácticas en el cuidado y utilización de los bienes de la organización, para que no se resienta el servicio a prestar a los usuarios=

La prórroga no será obligatoria para el adjudicatario, si no de común acuerdo, con preaviso de al menos dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato. En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes.

6. Presupuesto base de licitación.

El importe del presupuesto base de licitación para 12 meses se corresponde con las primas actuales con un ligero incremento que se corresponde con los siniestros abiertos, el aumento de costes en el sector, y el tradicional escaso interés de las compañías en acudir a este tipo de licitaciones en el sector.

El presupuesto base de licitación anual del expediente actual, adjudicado en febrero de 2020, fue de 80.400,00 €, sin IVA.



Es por ello por lo que el presupuesto base de licitación que se propone es de 95.500,00 euros (IVA excluido), lo que supone un aumento del 18,78% sobre el anterior presupuesto de licitación (80.400,00 €) y un incremento del 31,98% con respecto al importe vigente de adjudicación (72.355,06 €). La situación actual de incertidumbre debido a las consecuencias de la pandemia, hace que esta contratación se deba realizar en un ambiente volátil, lo que haría difícil la concurrencia si las prórrogas se declaran obligatorias y si el importe de licitación no aumentara en al menos la cuantía establecida.

7. Valor estimado del contrato.

El valor estimado del contrato lo constituye el importe total pagadero según las estimaciones del órgano de contratación, sin incluir el IVA. En el cálculo del valor estimado se han tenido en cuenta, como mínimo, además de los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de la ejecución material de los servicios, los gastos generales, de estructura y el beneficio industrial, cualquier forma de opción eventual, las eventuales prórrogas del contrato y las modificaciones al alza previsibles.

Se estiman posibles modificaciones del contrato de hasta un 10 % en la prima del segundo año, por si pudiera existir alguna circunstancia en la que aumentara el equipamiento, bienes o patrimonio a cubrir de forma significativa, por algún tipo de operación o aumento de actividad inicialmente no prevista. De esta manera, el valor estimado del contrato, para el período inicial más las posibles prórrogas y modificaciones asciende a 200.550,00 euros.

8. Modificaciones posibles previstas.

La modificación del contrato está prevista en el contrato por el motivo indicado en el párrafo anterior, y tendrá lugar cuando aumente significativamente el capital asegurado.

Las modificaciones no previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, o que, siendo previstas, no se ajusten a lo inicialmente previsto, se regulan en el art. 205 de la LCSP. El valor estimado del contrato incluye el efecto de las modificaciones previstas (Hasta un 10 % del valor de la prima).

9. Licitación electrónica.

Es obligatoria la licitación electrónica.

10. Justificación de los criterios de solvencia exigidos

Las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que debe reunir el empresario y la documentación requerida para acreditar los mismos se indican en el anuncio de licitación y se especifican en el pliego de cláusulas administrativas particulares, están vinculadas al objeto del contrato y son proporcionales al mismo. Es posible su acreditación con medios de otras entidades, siempre que durante toda la duración de la ejecución del contrato, el adjudicatario disponga efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incurso en una prohibición de contratar. La autorización expedida por la Dirección General del Seguros para el ejercicio de la actividad debería ser suficiente, para acreditar la solvencia. No obstante, se exige la establecida por la Ley.

Acreditación de la solvencia económica y financiera:

Artículo 87 de la LCSP, apartado/s: Número 1, apartado A)

Criterios de selección: Esta solvencia se considerará acreditada por las entidades cuyo volumen anual de negocio en el ámbito al que se refiere el contrato, es igual o



superior, en uno de los tres últimos ejercicios, a **una vez y media del valor** estimado anual del contrato.

Medio de acreditación: El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales debidamente legalizadas por el Registro Mercantil.

Acreditación de la solvencia técnica:

Artículo 90.1.a de la LCSP) Relación responsable de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de los tres últimos años, con el requisito mínimo de que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al **70%** del valor anual medio del contrato.

Si no fuera posible facilitar las referencias solicitadas por tratarse de una empresa de nueva creación o ausencia de actividad en todos o algunos de los tres últimos ejercicios, podrá acreditar su solvencia técnica conforme a los apartados b) y c) del art.90.1 de la LCSP:

Medio de acreditación:

- Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa de los que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad. (Art. 90.1.b)
- Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa. (Art. 90.1.c).

Criterios de selección:

- Declaración del representante legal de la empresa en la que se haga constar el personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad.
- Memoria descriptiva de las instalaciones y medios disponibles en la empresa que garanticen la ejecución del contrato, medidas empleadas para garantizar la calidad de los medios de estudio e investigación de la empresa.

11. Clasificación que se exige a los participantes.

No aplica, por no estar incluido el objeto del contrato en el Anexo II del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP) modificado por Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto.

12. Justificación de los criterios de adjudicación

El art. 145.3.g) de LCSP indica cuando procede aplicar más de un criterio de adjudicación, que en el caso específico de contratos de servicios, procede salvo que las prestaciones estén perfectamente definidos y no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente el precio el único factor determinante de la adjudicación.

En este caso, las prestaciones definidas pueden mejorarse de forma objetiva, aunque se trate de un mercado altamente regulado. Introducimos para ello criterios de



valoración adicionales al del precio que tiene un peso del 75 % con la fórmula generalmente utilizada en el SERMAS. Entre otros: Reducción del importe de la franquicia (hasta 15 puntos), Inclusión de la Derogación de la Regla Proporcional (el asegurado se compromete a la actuación y revisión anual de los valores de reposición informados en póliza) (5 puntos) y la renuncia a peritación de siniestros cuyo importe se encuentre bajo 6.000 euros, que agiliza las tramitaciones (5 puntos).

Las compañías cotizarán en función de sus tablas de riesgo y experiencia. Se considerará que la oferta es anormalmente baja si en el criterio oferta económica, la propuesta es inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales, cuando solo haya un licitador, o si fueran varias las ofertas, las que sean inferiores en más de 10 puntos porcentuales la media aritmética de las proposiciones presentadas.

13. Justificación de los criterios de desempate

En el PCAP se incluyen como criterios de desempate las medidas de carácter social establecidas en el art. 147.1.a), b) y e) como criterios de adjudicación preferente. Tendrán preferencia en caso de empate las proposiciones que reúnan más una característica de entre los tres apartados. Los eventuales empates se resolverán a favor de la oferta que según el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuación en el criterio de adjudicación preferente. En último caso, sorteo.

14. Justificación de condiciones especiales de ejecución

De acuerdo al apartado 2 del artículo 202 de la LCSP, se consideran condiciones especiales de tipo medioambiental para este contrato.

Las condiciones especiales de ejecución están vinculadas al objeto del contrato, no son discriminatorias, son compatibles con el derecho comunitario y tratan de que las prestaciones sean ejecutadas respetando y cumpliendo las disposiciones y recomendaciones establecidas en la Política Ambiental del Hospital.

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución no dará lugar a la resolución el contrato, pero se considera infracción grave, dando lugar a la imposición de la penalidad prevista.

También se imponen penalidades por el retraso en el suministro de información de siniestros actualizada.

15. Garantía provisional. Garantía definitiva.

No se considera necesario solicitar la constitución de una garantía provisional para garantizar la no retirada de las proposiciones hasta el momento de la adjudicación y formalización del contrato, porque no hay motivos de interés público al no tener dicha actuación efectos negativos en el desarrollo de la actividad asistencial de difícil reparación.

Tampoco se considera necesario la constitución de garantía definitiva al adjudicatario, para asegurar la correcta ejecución de la prestación, ya que la propia naturaleza de la prestación a prestar en sí misma, hace no razonable esta exigencia.

16. Responsable del contrato.

El órgano de contratación nombra como Responsable del Contrato al titular de la Dirección Económico Financiera y de SS.GG. para supervisar su ejecución y adoptar



las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.

La Unidad Encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato es la Dirección Económico Financiera y de SS.GG.

17. Conflicto de intereses.

El responsable del contrato designado por el órgano de contratación no tiene ningún conflicto de competencias y, por tanto, no tiene ni directa ni indirectamente ningún interés financiero, económico o personal que pueda comprometer la imparcialidad e independencia en el procedimiento de licitación, y que por tanto se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 64 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

18. Recursos.

De acuerdo con el artículo 44 de la Ley 9/2017 LCSP, determinados actos y decisiones de las entidades que ostenten la condición de poder adjudicador, cuando se refieran a contratos de suministros y servicios que tengan un valor estimado superior a cien mil euros, o, en el caso de contratos de obras, un valor estimado superior a tres millones de euros, son susceptibles de recurso especial en materia de contratación.



Por todo lo indicado anteriormente, esta Dirección Gerencia, de conformidad con lo establecido en el art. 116 de la Ley 9/2017 y, en virtud de las competencias atribuidas en materia de Contratación que se me atribuyen en virtud de los artículos 15,l) y 17 i) de los Estatutos del Hospital Universitario Fundación Alcorcón que establecen entre las funciones del Director Gerente realizar la adquisición de bienes y servicios, y contratar las obras y servicios dentro de las cuantías y límites que hayan sido aprobados por el Patronato a este respecto, y de la escritura de apoderamiento de 14 de diciembre de 2011 protocolizada con el número de protocolo 2.251 por el Notario del Madrid y de su Ilustre Colegio, D.José Luis López de Garayo y Gallardo, resuelve:

ORDENAR EL INICIO

del expediente de contratación de servicio mediante Procedimiento Abierto **PA.SER 006/20** para el “SEGURO A TODO RIESGO DE DAÑOS MATERIALES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN” a adjudicar por procedimiento abierto con pluralidad de criterios, por un importe de 95.500,00 euros con un plazo de ejecución de 12 meses, y con posibilidad de 1 prórroga anual.

Alcorcón, a 23 de marzo de 2021

Modoaldo Garrido Martin
Director Gerente

